

# PERIODICO OFICIAL

DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MICHOACAN DE OCAMPO  
«Registrado como artículo de segunda clase, con fecha 26 de noviembre de 1921.»

TOMO XLIV. | MORELIA, DOMINGO 4 DE MAYO DE 1924. | NUM 60.

## PODER EJECUTIVO

**SIDRONIO SANCHEZ PINEDA, Gobernador Constitucional Substituto del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, a todos sus habitantes ha de saber que:**

La H. Legislatura ha tenido a bien dirigirme el siguiente decreto:

El H. Congreso de Michoacán de Ocampo decreta:

Número 71.

Artículo 19.—Se modifican las leyes que para mejoramiento y recomposición de caminos se han expedido en el Estado hasta la fecha, en los términos siguientes:

Artículo 20.—Las vías de comunicaciones para los efectos de esta ley se dividen en vecinales de primero y segundo orden. Son de primero los que unen una Municipalidad con otra o con varias, y de segundo los que unen los pueblos o haciendas de una Municipalidad entre sí.

Artículo 39.—La mejora y recomposición de los caminos vecinales, comprendidos dentro de los límites de una Municipalidad estarán a cargo y bajo la inspección de su Ayuntamiento.

Artículo 49.—Cuando alguna Corporación Municipal juzgue útil y conveniente abrir un camino y que su construcción sea difícil y costosa, podrá dirigirse al Gobierno con los antecedentes del caso, y pedir su cooperación para la debida realización de la obra.

Artículo 59.—Para la construcción, mejora y recomposición de caminos, los Ayuntamientos consignarán en sus Presupuestos un impuesto hasta de un cuarto por ciento anual sobre todo capital existente en las Municipalidades cuyo valor fiscal exceda de trescientos pesos, ya consista en fincas urbanas, rústicas, semovientes, giros industriales, mercantiles o inmuebles y que someterán a la aprobación del Congreso del Estado.

Artículo 69.—Los caminos de que se trata tendrán cuando menos cinco metros de ancho. La recomposición y mejora deberán hacerse cada vez que sea necesario.

Artículo 79.—Cada vez que los Ayuntamientos obtengan del Gobierno del Estado la ayuda de que trata el artículo 49 de esta ley, deberán rendir al mismo la cuenta justificada de los gastos que se hayan erogado.

Artículo 89.—Las Corporaciones Municipales cuidarán de que cada año, en la época oportuna, se planten árboles en las márgenes de los caminos donde sea posible regarlos, principalmente en la entrada y salida de las poblaciones, prefiriendo a aquellos árboles que por su naturaleza permanezcan más tiempo.

Artículo 99.—Los Ayuntamientos son responsables ante el Gobierno de las faltas u omisiones que cometan en cumplimiento de lo que esta ley previene. El Gobierno hará efectiva esta responsabilidad según el caso y las facultades que le otorguen las leyes.

Artículo 109.—La apertura y conservación de estos caminos se declara de utilidad pública y por tanto podrán expropiarse previa indemnización, las zonas que sean necesarias y los materiales brutos más inmediatos a estas vías.

Artículo 119.—El Gobierno del Estado dispondrá de acuerdo con los Ayuntamientos, la apertura de los caminos que juzgue necesarios dentro de

sus jurisdicciones y que sirvan para facilitar las comunicaciones entre las poblaciones del Estado, ya sean por contratos o por medio de comisiones dos que se encarguen de dirigir la ejecución de estas obras.

Artículo 129.—Cada vez que lo estime pertinente el Ejecutivo del Estado mandará inspeccionar las vías de comunicación de que trata esta ley a fin de vigilar por sus buenas condiciones.

Artículo 139.—La persona que entorpezca el tránsito por los caminos de que trata esta ley causando desperfectos o en cualquiera otra forma será penada con arreglo a las disposiciones del Código Penal, ya sea por culpa o intencionalmente y sin perjuicio de que los perjudicados exijan la responsabilidad civil a que tengan derecho conforme a las leyes relativas.

### TRANSITORIO

Esta ley estará en vigor desde la fecha de su publicación.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado. —Morelia, a 13 de marzo de 1924. —Dip. Presidente, ALFREDO LEON. —Dip. Secretario, ALFONSO VALDES. —Dip. Secretario, J. J. PINEDA.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.

Palacio de los Supremos Poderes del Estado, Morelia, 22 de marzo de 1924. —El Gobernador Substituto Const. SIDRONIO SANCHEZ PINEDA. —El Sr. Gral. de Gobierno, Lic. SILVESTRE GUERRERO.

Es copia sacada fielmente de su original para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

—Sufragio Efectivo. No Reelección. —Morelia, a 26 de abril de 1924.

**SIDRONIO SANCHEZ PINEDA, Gobernador Constitucional substituto del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, a todos sus habitantes ha de saber que:**

La H. Legislatura ha tenido a bien dirigirme el siguiente decreto:

“EL H. CONGRESO DE MICHOACAN DE OCAMPO DECRETA:

Número 74.

Artículo 10.—La expropiación por causa de utilidad pública, autorizada por el artículo 27 de la Constitución General de la República, se efectuará en el Estado de Michoacán, conforme a las disposiciones de la presente ley.

Artículo 20.—Son susceptibles de expropiación por causa de utilidad pública, los bienes de propiedad privada y los que puedan reducirse a ella ya sean inmuebles, patentes de invención o de derechos, así como las negociaciones industriales o agrícolas. También podrán expropiarse los bienes muebles, cuando lo exija una necesidad pública.

Artículo 30.—Ninguna expropiación podrá efectuarse cuando los bienes mencionados en el artículo anterior, estén ya destinados a otra obra de utilidad pública,

**Artículo 4o.**—Los bienes que se refiere el artículo 2º o sean los terrenos, edificios, materiales, aguas y demás, podrán ser expropiados siempre que por sus condiciones especiales puedan ser destinados en beneficio público o de la comunidad, a servir de mercados, jardines, cementerios, caminos públicos, ampliación de los mismos, establecimiento de granjas, construcción de edificios para las oficinas de los Ayuntamientos, edificios escolares, bibliotecas públicas, cuarteles, teatros, terrenos deportivos, angares y terrenos para esterizar, museos, gabinetes de ciencias, estaciones telefónicas, telegráficas, radio-telegráficas, estaciones tranviarias o ferrocarrileras para construir los fondos legales de las poblaciones, para formar colonias para obreros, profesores de educación primaria, para fomentar la pequeña propiedad y la agricultura urbana y rural; para la construcción de caminos ferrocarrileros, canales, telégrafos, teléfonos, edificios públicos, rectificaciones de ríos y cualquiera otra obra de utilidad pública.

**Artículo 5o.**—La expropiación por causa de utilidad pública, puede decretarse en favor del Estado, de uno o varios Municipios o de las empresas individuales o colectivas cuando éstas tratan de implantar en cualquier punto del Estado una mejora, carretera, tranvía o ferrocarril al servicio del público, o cualquiera otra obra de utilidad pública a juicio del Ejecutivo del Estado.

**Artículo 6o.**—La autoridad competente para fundar y declarar administrativamente la utilidad pública de una expropiación, es el Ejecutivo del Estado, respecto de los bienes a que se refiere el artículo 4o. de esta Ley. Los Ayuntamientos del Estado, pueden solicitar del Ejecutivo que éste declare de utilidad pública la expropiación de las aguas potables que necesiten las poblaciones, de los edificios y terrenos que sean necesarios para el establecimiento de mercados, abastecimiento o alineación de calles, creación de abastos o panteones o para cualquiera otra obra de utilidad común.

**Artículo 7o.**—La expropiación se solicitará por escrito ante el Ejecutivo, por la persona, Ayuntamiento o empresa interesada, y la solicitud deberá llenar las siguientes condiciones:

I.—Se expresará el nombre, apellido y domicilio del solicitante, y de la persona o personas que tengan algún derecho sobre el bien materia de la expropiación.

II.—Se expresará, a ser posible, la extensión, linderos y ubicación del bien de que se trate, y se acompañará un croquis pormenorizado.

III.—Se indicará la obra de utilidad pública a que se vaya a destinar el bien de que se trate.

IV.—Se acompañará un certificado o vale de depósito de la Tesorería General del Estado o de alguna institución de crédito oficial o particular, por el importe del valor catastral del predio que se trate de expropiar, aumentando un diez por ciento. Cuando se trate de bienes que no sean predios rústicos o urbanos, o siéndolos no estén inscritos en el catastro, o cuando se traten de patentes de invención, derechos, negociaciones agrícolas o industriales, podrá presentarse la solicitud de expropiación sin acompañar el certificado o vale de depósito; pero el Ejecutivo en tales casos antes de hacer declaración alguna mandará hacer el avalúo pericial en los términos del artículo 10o.

**Artículo 8o.**—El precio que debe pagarse por la cosa expropiada, será el valor que sirva de base para el pago de contribuciones, aumentando en un diez por ciento, más el importe de

las mejoras posteriores el avalúo catastral, aumentando también en un diez por ciento.

**Artículo 9o.**—Cuando la expropiación fuere parcial, el precio se fijará por medio del avalúo que hará el catastro de la porción que trate de expropiarse.

**Artículo 10o.**—Cuando el catastro resolviere que no le es posible hacer el avalúo, ya porque no esté inscrito el inmueble por la naturaleza de éste o por cualquiera otra circunstancia, el avalúo se hará por medio de peritos nombrados uno por el propietario y otro por el interesado. Ambos nombrarán de común acuerdo un tercero para el caso de discordia; y a falta de acuerdo, la autoridad judicial lo designará. Para este efecto cualquiera de las partes ocurrirá en diligencias de jurisdicción voluntaria, solicitando el nombramiento.

**Artículo 11o.**—Cuando fueren varios los propietarios del bien que se trata de expropiar, nombrarán un representante común para que gestione tanto en lo administrativo como en lo judicial.

**Artículo 12o.**—Recibida la solicitud de expropiación, el Ejecutivo recabará los datos e informes que estime convenientes, y declarará de utilidad pública la expropiación si fuere procedente con arreglo a la Ley, en favor del promovente, o la denegará en caso contrario, comunicando su resolución al interesado, y mandando archivar el expediente y devolver la suma depositada.

**Artículo 13o.**—En los casos a que se refiere el artículo 10o., el Ejecutivo mandará desde luego practicar un avalúo pericial, expidiendo en su caso, al interesado, una constancia de que el interesado no quiso ponerse de acuerdo con el promovente, en el nombramiento de tercero para el caso de discordia. Hecho el avalúo pericial y depositado el valor de la cosa, se declarará de utilidad pública, la expropiación si fuere procedente.

**Artículo 14o.**—Al declararse de utilidad pública la expropiación, el Ejecutivo, pondrá a disposición del Juez de la Instancia de lo Civil o de Jurisdicción mixta, del Distrito Judicial en que esté ubicado el bien de que se trata, el expediente formado y la suma depositada, comunicando lo así a los interesados y a la Tesorería General del Estado o al representante legal, de la institución de crédito en que se haya constituido el depósito.

**Artículo 15o.**—Recibido por el Juez el expediente y la suma consignada, citará a juicio a los interesados y al Ministerio Público; en caso de ser el Estado o el Municipio el expropiante, fijándose el actor, es decir, a quien haya solicitado la expropiación, el término de tres días para que formule su demanda contra el propietario o los que tengan algún derecho sobre el bien de que se trata.

**Artículo 16o.**—Los términos para contestar la demanda y para la prueba serán de tres y ocho días, respectivamente. Si no fuere contestada la demanda en dicho término, se declarará perdido el derecho que pudo ejercitar el demandado, a solicitud del actor, siguiendo el juicio su curso legal.

**Artículo 17o.**—Concluida la dilación probatoria, se pondrán los autos a disposición de las partes por el término de tres días comunes, para que aleguen. Pasado este término, haya o no alegado las partes, se pronunciará la sentencia definitiva decretando o no la expropiación, solicitada, según fuere procedente.

**Artículo 18o.**—La sentencia a que se refiere el artículo anterior será apelable solo en el efecto

devolutivo y únicamente se admitirá el recurso cuando fuere interpuesto dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación, la cual se hará en la forma que previene el Código de Procedimientos Civiles.

Artículo 19º.—En la sentencia mandará el Juez dar posesión inmediatamente del bien expropiado al interesado en cuyo favor se hubiere decretado, otorgar el correspondiente título de propiedad, notificar a los ocupantes de aquel que lo desocupen dentro de quince días si fuere urbano, y de treinta si fuere rústico; así como que en el Catastro y en el Registro Público de la Propiedad se hagan las inscripciones o cancelaciones que procedan.

Artículo 20º.—El recurso de apelación de que habla el artículo 18º se admitirá de plano, emplazándose a las partes para que dentro de las veinticuatro horas se presenten ante el Superior a mejorar la alzada. A ese término se agregará un día más por cada veinte kilómetros de fracción, cuando el juicio se siga fuera de la capital del Estado.

Artículo 21º.—La segunda instancia se substanciará con sólo el escrito de expresión de agravios, que se presentará dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación del auto en que se haga saber a las partes la llegada de los autos, al Tribunal. De tal escrito se dará ciencia a la parte apelada, para que lo conteste dentro de igual término.

Artículo 22º.—La sentencia de segunda instancia se pronunciará dentro de tres días después de contestado el escrito de expresión de agravios o de haber transcurrido el término concedido al efecto; sin haberlo verificado; y si fuere confirmatoria de la de primera instancia se condenará al apelante al pago de las costas de ambas instancias.

Artículo 23º.—Contra los decretos y autos dictados en el juicio de expropiación, no cabrá más recurso que el de responsabilidad; y los Jueces y Magistrados no podrán excusarse ni ser recusados más que en el caso de estar interesados personalmente y directamente en la expropiación de que se trate.

Artículo 24º.—Los bienes expropiados no podrán destinarse a objetos diverso del que motivó su expropiación.

Artículo 25º.—Transcurridas las cuarenta y ocho horas que para interponer el recurso de apelación señala el artículo 18º, o recibido en el Juzgado el testimonio de la sentencia ejecutoria, se procederá, a solicitud del actor, a la ejecución de ella en la vía de apremio. En el procedimiento de ejecución no se admitirá recurso alguno.

Artículo 26º.—Si el o los ocupantes de la finca, no cumplieren voluntariamente con la sentencia en el término que se les haya señalado, el Juez, a petición del actor, otorgará en rebelía del demandado el título de dominio; procederá al lanzamiento correspondiente y librará los oficios relativos para las inscripciones o cancelaciones que procedan en el Catastro y en el Registro Público de la Propiedad.

Artículo 27º.—A la falta de disposición de esta ley, serán aplicables en materia de expropiación las disposiciones relativas de los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles.

Artículo 28º.—Si transcurrido un año después de haberse puesto en posesión al expropiante, no se destina el objeto expropiado a la obra que motivó su expropiación, ni se hubiere dado principio a dicha obra, el expropiado tendrá derecho a la devolución del predio, devol-

viendo a su vez el precio que hubiere recibido. Las mejoras que el predio hubiere recibido, que darán a beneficio del que obtengan la devolución.

Artículo 29º.—La devolución debe pedirse ante la Autoridad judicial correspondiente, dentro de treinta días de transcurrido el año a quo se refiere el artículo anterior. Pasado aquel término no se perderá todo derecho.

Artículo 30º.—El procedimiento para obtener la devolución, será el mismo que haya servido para la expropiación.

El Ejecutivo del Estado dispondrá se publique, circule y observe.

Salón de sesiones del H. Congreso del Estado.—Morelia, a 14 de marzo de 1924.—Dip. Presidente ALFREDO LEON.—Dip. Srio., ALFONSO VALDES.—Dip. Srio., J. JESUS PINEDA.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le de el debido cumplimiento.

Palacio de los Supremos Poderes del Estado.—Morelia, 22 de marzo de 1924.—El Gobernador Substituto Const., SIDRONIO SANCHEZ PINEDA.—El Secretario Gral. de Gobierno, Lic. SILVESTRE GUERRERO.

## DE LO CIVIL.

### EDICTO.

Michoacán de Ocampo.—Juzgado de 1ª Instancia del Dto. de La Piedad.

En el juicio civil ordinario que sobre pago de pesos sigue don Francisco González contra Margarita Anaya, se dictó el siguiente auto:

La Piedad, 24 veinticuatro de enero de mil novecientos veinticuatro.—Como pide agréguese este escrito a las diligencias de providencia precautorias a que se refiere, se admite la anterior demandando en la vía ordinaria civil y por lo mismo emplácese a la señora Margarita Anaya mediante tres edictos consecutivos que se publicarán en el Periódico Oficial del Estado y en la puerta del Juzgado; para que en el término de 30 treinta días contados desde la publicación del primer edicto se presente a contestar la demanda, apercibida de que si no lo hace, se tendrá por contestada, presumiéndose salvo prueba en contrario que son ciertos los hechos enumerados en ella. Con apoyo en los artículos 43, 80, 380, 381, 388, 1015 y 1016 del Código de Procedimientos Civiles, lo protejo el ciudadano Francisco Espinosa, Juez Menor en turno de la Primera Instancia, agregando que se tiene como apoderado del señor don Francisco González al señor licenciado José Bermúdez. Doy fé, F. Espinosa.—Pascual Hernández, Srio.—Rubricados.

Lo que notifico a la señora Margarita Anaya por medio del presente que se expide para su publicación en el Periódico Oficial; en el concepto de que las copias del traslado quedan en la Secretaría a su disposición.

La Piedad, enero 25, veinticinco de 1924 mil novecientos veinticuatro.—PASCUAL HERNANDEZ, Srio.

27-1º-4.

### EDICTO

Michoacán de Ocampo.—Juzgado Primero de lo Civil.—Morelia.

En las diligencias practicadas a instancia de la señorita Josefa Reyes Téllez, sobre interdicción de Emerenciana de los mismos apellidos, por causa de demencia, obra la resolución que en lo conducente dice:

“Morelia, 12 doce de noviembre de 1924 mil